

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	Francisco Orlando Arroyave Duque
DEMANDADO	Colpensiones y Junta Nacional y Regional de Calificación de Invalidez
PROCEDENCIA	Juzgado 07 Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 007 2020 00021 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 049 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Pensión de invalidez de origen común – no acredita PCL igual o superior al 50%
DECISIÓN	Revoca y absuelve

En la fecha, **veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo, y como ponente Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento con relación a los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de **Colpensiones y de la Junta Regional de Calificación de Invalidez**, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario que promoviera en contra de estas y de la **Junta Nacional de Calificación de Invalidez**, el señor **Francisco Orlando Arroyave Duque**. Radicado único nacional 05001 3105 **007 2020 00021** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de las restantes integrantes el proyecto, estudiado, discutido y aprobado mediante acta **Nº 006**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación:

Antecedentes

El demandante convocó a juicio a las accionadas pretendiendo se declare la nulidad de los dictámenes emitidos por Colpensiones y la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez; en consecuencia, se establezca que cuenta con una PCL del 52,54% de origen común, y con ello se condene a Colpensiones a reconocerle y pagarle pensión de invalidez desde el 18 de julio de 2017, incluidas las mesadas adicionales, intereses moratorios o en subsidio indexación, y costas del proceso.

De manera subsidiaria insta para que se le reconozca la pensión anticipada de vejez de conformidad con el parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, al tener un 30.24% de deficiencia, junto con las mesadas adicionales, intereses moratorios o indexación, y costas del proceso.

En sustento de ello afirma que, se afilió al régimen de prima media con prestación definida el 2 de julio de 1974, acreditando un total de 1.161 semanas de cotización; fue **valorado por Colpensiones el 25 de octubre de 2017, determinándole una PCL del 39,38% de origen común estructurada el 18 de julio de 2017**, decisión que fue conocida por la **Junta Regional de Calificación de Invalidez, al haberse presentado inconformidad frente a la misma, entidad que aumentó el 17 de enero de 2018, la PCL al 47,67% y mantuvo la fecha de estructuración**, experticia frente a la que se interpuso **recurso siendo desatado el 25 de enero de 2019, por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, confirmando la decisión objeto de revisión**; que acudió ante la **Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, entidad le estableció una PCL del 52,45% de origen común, estructurada el 18 de julio de 2017**, al haber considerado todos sus padecimientos y el

contenido de la historia clínica; que presenta **un porcentaje ponderado de deficiencia del 30,24%**, esto es superior al 25% establecido en el parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, adicional a que cuenta con 55 años al haber nacido el 17 de febrero de 1955 y 1.161 semanas de cotización; que solicitó el reconocimiento y pago de la pensión.

En auto del **11 de febrero de 2020 se admitió** y ordenó dar trámite a la acción, una vez enteradas las demandadas de la existencia del proceso, procedieron a allegar contestación, así:

Colpensiones, admite la fecha de nacimiento y de afiliación del actor al régimen de prima media con prestación definida, el número de semanas cotizados, el contenido del dictamen emitido por la entidad, así como por la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, y la solicitud de nulidad de los experticios; con relación a los demás supuestos de hecho, esgrime que no le constan y que técnicamente no son hechos. **Resistió las pretensiones** y formuló excepciones de mérito tendientes a enervarlas, tales como: inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir, buena fe, prescripción, imposibilidad de condena en costas y la innominada o genérica.

La Junta Nacional de Calificación de Invalidez, acepta el contenido de los dictámenes emitidos por Colpensiones, la Junta Regional y la entidad, los demás supuestos no son ciertos o no le constan. Se atiene a lo que se declare probado dentro del proceso; no obstante, indica que la decisión emitida por los profesionales de esa entidad se encuentra soportada en la real condición que presentaba el paciente para el momento de la calificación, consignada en la historia clínica, las pruebas diagnósticas y la valoración practicada, bajo los lineamientos del Decreto 1507 de 2014, y en cuanto al procedimiento con el Decreto 1072 de

2015. Finalmente, presentó las excepciones de mérito de: legalidad de la calificación emitida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la variación en la condición clínica del paciente con posterioridad al dictamen de la Junta Nacional exime de responsabilidad, improcedencia de las pretensiones respecto a la Junta Nacional, buena fe y, la genérica.

Mediante proveído del 08 de abril de 2022, **se dio por no contestada la demanda** por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez.

La primera instancia **terminó con sentencia** proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, en la que declaró la nulidad de los dictámenes emitidos por Colpensiones, las Juntas Regional y Nacional de Calificación de invalidez, dándole validez a la experticia rendida por la Facultad Nacional de Salud Pública, la cual determinó que el señor Francisco Arroyave, presenta una PCL del 52,54% estructurada el 18 de julio de 2018; en consecuencia, condenó a Colpensiones a reconocerle y pagarle \$62.307.950, por concepto de retroactivo pensional causado hasta el 7 de diciembre de 2022, suma frente a la cual dispuso la indexación y los descuentos a salud. A partir del 7 de diciembre de 2022, la mesada a cancelar asciende al mínimo legal mensual vigente, en razón a 13 al año. Declaró probada la excepción de improcedencia de intereses moratorios e impuso costas a cargo de Colpensiones y las Juntas en favor del actor.

Argumentó la juzgadora que las calificaciones emitidas por la Junta Regional y Nacional de Invalidez, si bien mencionan el diagnóstico de hipertensión no lo valoran como si lo hizo el perito de la Facultad Nacional de Salud Pública, siendo esta patología la que aumenta el porcentaje para el factor de deficiencia, por tal, al lograrse acreditar que se evaluaron todos y cada una de las enfermedades padecidas, consideró que la PCL superaba el 50%, resultando procedente declarar

la nulidad de los dictámenes solicitados, y con ello tener que señor Francisco cuenta con los requisitos necesarios para acceder a la pensión anticipada de vejez por deficiencia, en tanto, esta asciende al 30%, sumado a que cuenta con la edad y las semanas para hacerse acreedor a la misma, desde la fecha en que le fue estructurada la PCL, con mesada de un salario mínimo legal mensual vigente.

Inconforme con la anterior decisión dos de las demandadas interpusieron recurso de apelación, así:

Colpensiones, solicita la revocatoria, dado que, los dictámenes emitidos por las Juntas se encuentran conforme a derecho, adicional a que valoraron íntegramente al actor y consideraron todas las patologías, entre ellas y contrario a lo expuesto por la juez, la hipertensión, adaptándolas a lo establecido en el Manual Único de Calificación de Invalidez, debiéndose considerar que son 3 valoraciones de entidades competentes las que indican que el actor no es invalido y, solo una la que sí.

Junta Regional de Calificación de Invalidez, recurre a fin de que se emita absolución frente a la condena en costas, al estar guiada su actuación por la Ley, así como por los eventos históricos y la evaluación del actor.

De la oportunidad para presentar alegaciones hizo uso **Colpensiones**, indicando frente a lo que es objeto de discusión que:

"es pertinente reiterar que no es procedente la declaración de nulidad del dictamen emitido por la entidad que represento, y por consiguiente a los emitidos por las respectivas Juntas ello en atención a lo establecido en el artículo 41 de la ley 100 de 1993, Así a todas luces el dictamen emitido por mi representada, y las respectivas juntas guarda total legitimidad, validez jurídica y efectos jurídicos, y no es dable imputársele algún yerro, bajo el entendido

que emanan de autoridades científico técnicas autorizadas por el legislador, conforme el artículo antes referenciado, y guardan un deber intrínseco de fundamentarse en la historia clínica, exámenes médicos y demás observaciones diagnósticas relativas al estado de salud del paciente, en el caso concreto fue expedido conforme el manual único de calificación vigente esto es el decreto 1507 de 2014, igualmente dentro del mismo como puede observarse se valoró la historia clínica aportada por el demandante al momento de la calificación, se tuvo en cuenta imágenes diagnósticas, exámenes paraclínicos, exámenes ocupacionales y conceptos de rehabilitación, se tuvo en cuenta una valoración física realizada el día de la consulta, por lo que se determinó como porcentaje de pérdida de capacidad laboral el 47.67%, con una fecha de estructuración 18/07/2017, este último dado por la junta nacional de calificación, luego de haberse surtido los diferentes recursos contra el dictamen emitido por Colpensiones y a su vez de la junta regional.

Ahora en lo que al dictamen emitido por la Facultad Nacional de Salud Pública de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA se insiste por la suscrita que el mismo no se encuentra acorde con la realidad medica del demandante; aunado al concepto determinado en el dictamen médico pericial emitido por el CENDES y requerido por el HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL para el proceso de referencia, en el cual se establece que el dictamen entregado por la Dra. Martha Lucia Escobar Pérez asigna tablas y severidades que no corresponden a la realidad de la información de la historia clínica aportada por el demandante, no se tiene en cuenta otras tablas necesarias como se ha dicho para evaluar correctamente las afectaciones de nervio periférico (tabla 12.13) porque para el tema de la artrosis de manera contraria a los descriptores de la tabla 14.15 se asigna una severidad 3 que no corresponde para un origen degenerativo no por un origen autoinmune/inflamatorio, y para el tema de hipertensión también sobrevalora en contravía de los informes y controles donde no hay, ni ha habido, compromiso de órganos blancos y cifras tensionales controladas con un solo medicamento, circunstancias estas que impiden dar el valor probatorio pretendido.”

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones

Como hechos debidamente acreditados en los autos, no discutidos y que se tornan relevantes para resolver se tienen: que Francisco Arroyave fue calificado por Colpensiones el **25 de octubre de 2017**, con una **pérdida de capacidad laboral del 39,38% estructurada el 18 de julio de 2017**, decisión frente a la cual se mostró en desacuerdo y por ello, el 17 de enero de 2018, fue valorado por la **Junta Regional de Calificación de Invalidez**, quien le determinó una **PCL 47,67%**

estructurada el 18 de julio de 2017, por los diagnósticos de artrosis erosiva, compresiones de las raíces y plexos nerviosos en trastorno de los discos intervertebrales, gonartrosis no es especificada, hipertensión arterial y síndrome del túnel carpiano; presentando frente a dicha experticia recurso de apelación, siendo desatado por la **Junta Nacional de Calificación de Invalidez, el 25 de enero de 2019, confirmando la decisión objeto de revisión.** Al trámite se allegó dictamen del 03 de septiembre de 2019, rendida por la **Facultad Nacional de Salud Pública**, quien estableció que el señor Francisco presenta una **PCL del 52,54% estructurada el 18 de julio de 2017, con una deficiencia del 30,24%**, por los diagnósticos de osteartrosis generalizada, hipertensión arterial, síndrome del túnel carpiano moderado derecho dominante, síndrome del túnel carpiano leve izquierdo. **De manera oficiosa esta Sala dispuso la valoración integral** del señor Francisco Arroyave, por parte del **CENDES**, entidad que **estableció que presenta una PCL del 47,86% estructurada el 18 de julio de 2017, con una deficiencia global ponderada del 22,86%.** Considerándose como diagnósticos: Gonartrosis rodilla derecha x osteoartrosis degenerativa, omalgia hombro izquierdo por osteocondrosis de articulación acromioclavicular, trastorno de postura y marcha, hipertensión arterial, limitación AMA rodilla izquierda con reemplazo total de rodilla, espondilosis/osteoartrosis degenerativa/anterolisteis de columna lumbar, síndrome de túnel del carpo derecho compromiso sensitivo y motor moderado y, síndrome del túnel del carpo izquierdo compromiso sensitivo leve. **Ante la solicitud de aclaración elevada por la parte actora, el 22 de febrero de 2023**, el médico evaluador procedió a dar respuesta a cada uno de los 16 puntos que fueron objeto de inconformidad, sin que hubiese variación en la calificación, documento del cual se le dio traslado a las partes, sin haberse presentado manifestación alguna.

Conforme a lo anterior, **el problema jurídico** se circunscribe a establecer la eficacia probatoria del dictamen aportado con la demanda, respecto a los practicados por Colpensiones, la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez y el decretado de manera oficiosa, a fin de determinar si al demandante le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez o pensión anticipada de vejez por invalidez.

Pues bien, debe decirse que la Corte Constitucional, entre otras, en la Sentencia T-873 de 2013 ha considerado la calificación de la pérdida de capacidad laboral como un derecho que tiene toda persona, el cual cobra gran importancia al ser el medio para la realización efectiva de otras garantías fundamentales como la salud, la seguridad social y el mínimo vital, en tanto que permite determinar a qué tipo de prestaciones tiene derecho el afectado por una enfermedad o accidente, producido con ocasión o como consecuencia de la actividad laboral, o por causas de origen común.

Así, atendiendo la Jurisprudencia Constitucional, la calificación de la pérdida de capacidad laboral debe considerar las condiciones específicas de cada persona, valoradas sistemáticamente, dicha valoración puede tener lugar no solo como consecuencia directa de una enfermedad o accidente de trabajo, claramente identificado, sino también, de patologías que resulten de la evolución posterior de esta enfermedad o accidente, o, a su vez, por una situación de salud, inclusive de origen común.

De la misma manera dicha corporación ha establecido reglas procedimentales básicas que rigen las actuaciones de las entidades encargadas de calificar la pérdida de capacidad laboral, y que conforman los contenidos mínimos del derecho fundamental al debido proceso en esta clase de trámites, encontrándose dentro de ellas: "ii) **La valoración**

del estado de salud de la persona calificada debe ser completa e integral, pues las juntas deberán proceder a realizar el examen físico correspondiente, y al sustanciar y proferir el respectivo dictamen **deben tener en cuenta todos los aspectos médicos consignados en la historia clínica y ocupacional del paciente**”(sentencia T 713 de 2014 y T 093 de 2016).

Ahora bien, el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, determina que son las Juntas de Calificación de Invalidez, junto con Colpensiones, las EPS, las ARL y las compañías de seguros que asuman los riesgos de invalidez y muerte, las entidades responsables de establecer, con fundamento en criterios técnicos, médicos y científicos, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, el origen de la misma y su fecha de estructuración. No obstante lo señalado en esta disposición legal, ninguna duda queda que tales dictámenes pueden ser debatidos judicialmente, en tanto, es posible que dentro de un trámite ante la justicia ordinaria se puedan acreditar, por cualquier medio probatorio, los errores en que pudo haber incurrido una pericia, atendiendo que, en los juicios laborales, al tenor del artículo 51 del C.P.T., son admisibles todos los medios de prueba establecidos por la Ley (SL, 19 oct. 2006, rad. 29622, SL, 27 mar. 2007, rad. 27528, SL, 18 sep. 2012, rad. 35450, SL, 30 abr. 2013, rad. 44653, SL16374-2015, CSJ SL5280-2018, SL4571-2019, SL1958-2021 y SL5694-2021). De acuerdo con ello, las partes tienen libertad probatoria, pudiendo demostrar sus sustentos fácticos por el que les resulte más apropiado, teniendo como único límite los criterios de utilidad, conducencia y pertinencia de la prueba.

Esta controversia es posible, por cuanto dichas experticias “*no tienen la virtud de resolver de manera definitiva las controversias surgidas en torno al grado de invalidez ni de producir efectos de cosa juzgada*”, dado que ello solo ocurre con el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, que “*implica el desarrollo de una serie de actos procesales que culminan en la expedición de un acto final -la sentencia-, llamado a definir el punto controvertido con fuerza de verdad*

legal” (SL1958-2021), por lo que para el caso sería una entidad diferente a la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez al haberse presentado inconformidad por parte del demandante frente a los dictámenes rendidos por las misma, la encargada de determinar su pérdida de capacidad laboral, pues así fue previsto por el propio legislador, siendo estos dictámenes los medios de convicción idóneos para fijar tanto el grado de pérdida de la capacidad laboral como la fecha de estructuración, *ítems* que, en principio se tienen como invariables, no por el hecho de que tales aspectos exijan una determinada solemnidad, que desde luego no la tienen, sino porque establecerlos requiere de unos conocimientos técnicos y científicos de los que carece el operador judicial, razón por la cual el legislador, se insiste, los difirió a organismos especializados en el tema.

Sobre la revisión de la pérdida de capacidad laboral, atendiendo a que la invalidez es un criterio susceptible de progresividad o regresividad, pues con él se pretende determinar si una persona está o no materialmente en situación de invalidez, se ha pronunciado el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, indicando en la SL3008-2022, que:

"es absolutamente factible que, dada la evolución de las patologías, la aparición de nuevos diagnósticos de un mismo origen o de una génesis diversa, pueda no solo determinarse en forma inicial un porcentaje de pérdida de capacidad laboral, sino también revisarse en el sistema de seguridad social o por vía judicial una calificación que ya está en firme o realizarse una calificación integral que incluya factores comunes y laborales, con el fin de dictaminar la situación material de invalidez de una persona, lo anterior, con las características propias que supone cada uno de estos trámites de calificación."

Teniendose establecido por la jurisprudencia especializada que cuando se controvierte un dictámen, el operador judicial está sujeto a tomar en su integridad el que de manera objetiva le de mayor credibilidad y certeza sobre los puntos debatidos, sin que pueda configurar uno propio

a su acomodo, tomando datos de uno y otro, y dado, que para el caso Colpensiones presentó inconformidad frente a la decisión emitida, fue que esta Sala procedió a decretar nueva prueba de oficio, para la calificación integral del demandante, la que fue rendida por el Cendes, quien como ya se dijo en dictamen **estableció que el actor presenta una PCL del 47,86% estructurada el 18 de julio de 2017, con una deficiencia global ponderada del 22,86%.** Valorándose los diagnósticos de *ganartrosis rodilla derecha x osteoartrosis degenerativa, omalgia hombro izquierdo por osteocondrosis de articulación acromioclavicular, trastorno de postura y marcha, hipertensión arterial, limitación AMA rodilla izquierda con reemplazo total de rodilla, espondilosis/osteoartrosis degenerativa/anterolisteis de columna lumbar, síndrome de túnel del carpo derecho compromiso sensitivo y motor moderado y, síndrome del túnel del carpo izquierdo compromiso sensitivo leve.* Teniendo en cuenta para ello, examen médico general, físico, su estado neurológico, su esfera mental, las impresiones diagnósticas, la historia clínica, dejándose consignado como conclusión *“De acuerdo con el manual de calificación de invalidez vigente para este caso –Decreto 1507/2014, su historia clínica, los conceptos de los especialistas tratantes, los diferentes estudios de imágenes, los dictámenes previos, los elementos de hecho y de derecho, las normas técnicas de procedimiento, directrices del manual de calificación acorde con las capítulos y tablas respectivas, la valoración clínica realizada el pasado 25 de enero de 2023, el archivo de imágenes y videos que se aportan para este expediente, el señor Francisco Orlando Arroyave Duque presenta una pérdida de capacidad laboral de 47,86%, que genera una incapacidad permanente parcial, con fecha de estructuración 18/07/2017. Origen común.”* Esclareciendo que ***“el dictamen aportado y realizado por la U de A presenta sobrevaloración de las deficiencias acorde con las tablas y grado de severidad de las mismas, apartándose de los conceptos de los tratantes consignados en el historial clínico compartido con el expediente y los estudios de imágenes a los distintos segmentos corporales.”*** Experticio que fue objeto de aclaración por parte el medico evaluador, ante la solicitud presentada por la parte actora en la cual se mostró inconforme con la conclusión a la que allegó,

sin que hubiese sufrido variación dadas las explicaciones dadas por el galeno.

Calificación que se encuentra acorde a las deficiencias baremadas, ofreciendo plena credibilidad a la Sala, y que en lugar de desvirtuar confirma las atacadas, realizadas por Colpensiones y en especial por la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, quienes establecieron que el mismo cuenta con una PCL del 47,67%, distando de estas solo en un 0,19%, sumado a que se valoró de manera directa al actor, sin que sea posible modificar ninguno de los aspectos, no solo por carecer los juzgadores de los conocimientos técnicos para hacerlo, sino porque la jurisprudencia especializada es clara en indicar que:

*si en un proceso se encuentran enfrentados dos dictámenes, uno de la Junta Regional y otro de la Nacional, el juez del Trabajo y de la Seguridad Social, en virtud de la libertad probatoria prevista por el artículo 61 del CPTSS, está facultado para escoger lo establecido en el primero o en el segundo, e inclusive ordenar un tercero, **pero el que acoja debe tomarlo en su integridad, esto es, no puede escindirlo y menos configurar uno nuevo con apartes de uno y otros**, así se explica en sentencia SL1021 – 2019 radicado 62309 del 27 de marzo de 2019*

Así las cosas, al ser el medio de convicción anotado el idóneo para determinar tanto el grado de pérdida de la capacidad laboral como la fecha de estructuración, al haber sido emitido por organismos especializados en el tema y autorizados por el legislador, así como convalidar el experticio rendido por las entidades autorizadas por la ley para emitir los mismos, esto es las Juntas, y advertir que el **dictamen aportado y realizado por la U de A presenta sobrevaloración de las deficiencias acorde con las tablas y grado de severidad de las mismas**, se tienen las experticias objeto de revisión como invariables, pues, dichos conocimientos técnicos y científicos tienen que ser refutados por un medio igual, al carecer el operador judicial de ellos (ver sentencia SL1021-2019), y al desvirtuar estos las conclusiones del dictamen de

parte, de manera objetiva y atendiendo los diagnósticos, historias y valoración del actor, lo procedente es revocar la decisión revisada, **primero**, por no contar el señor Francisco Arroyave con una PCL superior al 50% y, **segundo**, por no acreditar los supuestos establecidos en las sentencias T-007-2009, T-201 de 2013 y T-462 de 2016, de la Corte Constitucional, y en la SL1037-2021, SL2681-2021, SL5163-2021, y SL2421-2022, para darle aplicación a lo establecido en el parágrafo 4º del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, esto es padecer una deficiencia igual o superior al 50%, pues véase como en el dictamen se le asigna en este ítem 22,86%, que no supera el 25% al ser el máximo previsto por ley 50%.

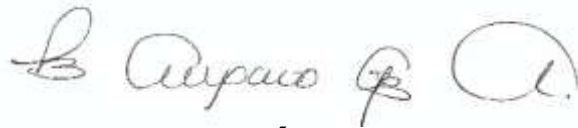
Al revocarse la decisión, se hace innecesaria la revisión de la imposición de la condena en costas a cargo de la Junta Regional, pues estas quedan en ambas instancias a cargo del demandante y en favor de las entidades accionadas (art. 365 numerales 4 y 6 del C.G. del P.). Inclúyanse como agencias en derecho en esta instancia la suma de \$1.500.000,00, distribuidos en igual proporción.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **revoca** la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad dentro del proceso ordinario promovido por el señor **Francisco Orlando Arroyave Duque**, contra **Colpensiones y la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez**, para en su lugar absolver a Colpensiones de las pretensiones incoadas en su contra.

Costas en ambas instancias a cargo del demandante y en favor de las entidades accionadas. Inclúyanse como agencias en derecho la suma de \$1.500.000,00, distribuidos en igual proporción.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO**, que se fijara por **secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Las magistradas (firmas escaneadas)



LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO